



FILIPINAS

Duterte busca nuevos socios y aliados en detrimento de los EE.UU.



Rodrigo Duterte fue el ganador de las últimas elecciones presidenciales celebradas en Filipinas el pasado 9 de mayo de 2016. Cimentó su victoria electoral en la promesa de impulsar una mejor redistribución de la renta en un país en el que, pese al elevado crecimiento económico de los últimos años, el 76% de la riqueza nacional sigue, como hace décadas, estando controlada por 40 influyentes familias. Pero, sobre todo, lo que acabó siendo determinante de cara a su victoria electoral fue su promesa de acabar con la delincuencia en el plazo de seis meses. Siendo alcalde de Davao, la tercera ciudad más grande del país, Duterte había llevado a cabo una guerra sin cuartel contra



la delincuencia y la droga, logrando disminuir sensiblemente los índices de criminalidad en una de las urbes más inseguras del archipiélago. En su campaña electoral prometió hacer lo propio a escala nacional. Dicho y hecho. Desde que tomara posesión de su cargo de Presidente el pasado mes de junio, Duterte ha conseguido reducir en un 49% la delincuencia a nivel nacional y su popularidad entre sus compatriotas ha crecido como la espuma. Efectivamente, aunque en las presidenciales de mayo sólo obtuvo un 37% de los votos, una reciente encuesta indica que un 76% de los filipinos está satisfecho con su gestión y que únicamente un 11% se declara descontento. Sin embargo, su sangrienta cruzada contra la delincuencia y la droga ha

dejado ya casi 4.000 muertos entre ejecuciones sumarísimas a cargo de operaciones de la policía, que está actuando con una enorme impunidad, y de grupos de pistoleros que matan sin que sus crímenes sean investigados. El propio Duterte ha llegado a compararse a sí mismo con Hitler en su deseo de masacrar a los drogadictos al igual que el líder nazi hizo con los judíos.

Las violaciones de los derechos humanos asociadas a su campaña contra la delincuencia le han valido a Duterte durísimas críticas en Occidente, concretamente de parte de la UE y de la Administración estadounidense. Duterte reaccionó con insultos a la ONU, a la Unión Europea y, especialmente, al principal aliado de su país, los EE.UU., a cuyo presidente, Barak Obama, insultó gravísimamente, lo que provocó que este último cancelara una reunión bilateral con su homólogo filipino. A continuación, los hechos se han precipitado de forma casi dramática. En un viaje a la República Popular China efectuado entre los días 19 al 21 de octubre, el primero en su calidad de jefe de Estado, Duterte anunció, para deleite de los empresarios chinos que le escuchaban, la “separación”, tanto militar como económica, entre su país y los EE.UU. y su intención de unirse en un “eje ideológico” con China y Rusia. Su estancia en la República Popular fue bastante fructífera, ya que obtuvo la “promesa” de acuerdos económicos por un importe total de 24.000 mill.\$ (una cifra equivalente a casi un 8% del PIB del archipiélago).



De ese importe total, 15.000 mill.\$ irían destinados a inversiones en infraestructuras, uno de los objetivos prioritarios de Duterte. El resto -9.000 mill.\$- sería financiación concesional otorgada por los bancos estatales chinos. Además, Filipinas obtuvo ventajas comerciales, ya que China anunció su intención de levantar la prohibición a las importaciones de piña tropical y

plátanos filipinos, dos productos muy importantes para la agricultura del archipiélago. La República Popular impuso esta prohibición durante la presidencia de “Nonoy” Aquino. A cambio de estas ventajas económicas, Duterte afirmó que su país no tendría en cuenta un reciente fallo del Tribunal Internacional de La Haya que rechaza la pretensión china de reclamar la soberanía sobre más del 80% de las aguas (y del lecho y del subsuelo) del Mar del Sur de China. Dicho de otro modo, el nuevo Presidente filipino declinó el tener en cuenta una sentencia que era favorable a los intereses de su país y, a cambio, prometió iniciar conversaciones bilaterales con la República Popular sobre la cuestión de la soberanía sobre estas aguas, ricas en pesca y cuyo subsuelo alberga importantes yacimientos de gas y petróleo. La soberanía sobre el Mar del Sur de China o sobre parte de él la reclaman además otros estados asiáticos, por lo que la creciente presencia de pesqueros y de navíos de guerra chinos, así como la construcción de estructuras e islotes artificiales constituye un foco de tensión en la zona. El cambio de actitud de Duterte supone un triunfo para China, que siempre ha



querido discutir las cuestiones de soberanía de manera bilateral con cada uno de los países, evitando darle un tratamiento multilateral.

Por último, Filipinas tampoco descartó empezar a sustituir a los EE.UU. por China y Rusia como principales proveedores de armas.

Este giro de Duterte provocó una auténtica conmoción en Washington. Filipinas ha sido tradicionalmente el principal aliado en el Sudeste Asiático de los EE.UU.. Desde el año 1951 está en vigor el Tratado de Defensa Mutua, que estipula que los dos países se apoyarán mutuamente en el caso de que alguno de ellos fuese atacado por un tercero. Hasta su desmantelamiento a comienzos de los años 90, EE.UU. mantuvo en Filipinas un importante número de bases militares y navales. En 2014, y ante la actitud crecientemente agresiva de la República Popular en el Mar del Sur de China, Filipinas y EE.UU. firmaron el Acuerdo Reforzado de Cooperación Defensiva (EDCA), por el que se autoriza a los EE.UU. a utilizar 5 bases militares controladas por las FF.AA filipinas. Sin embargo, Duterte ha anunciado su intención de revisar dicho acuerdo y también ha dicho que, en adelante, ya no habrá más maniobras militares conjuntas entre los dos países.

Lo cierto es que el actual Presidente filipino tiene una mentalidad anti-estadounidense casi de manual. Estudiante durante la guerra de Vietnam, siempre ha repudiado el “imperialismo” estadounidense y quiere mostrarse al mundo como un líder soberano e independiente. En EE.UU., sus invectivas y sus cambios de orientación geo-estratégica han sentado mal y están siendo vistos con preocupación. Sin embargo, se piensa que, en el fondo, Duterte no tiene intención de romper del todo los lazos con la ex metrópoli. Lo cierto es que una situación de ruptura total podría ser un mal negocio para ambos. La influencia geopolítica de Washington en la región se podría ver socavada en un momento en el que las tensiones entre Pekín y sus vecinos están aumentando. Pero Filipinas también tendría muchísimo que perder. EE.UU. es el tercer socio comercial del archipiélago y es también una fuente importantísima de inversiones en un sector crucial como es el del “outsourcing” (call centers, etc...), que mueve unos 20.000 mill.\$ en el archipiélago, donde genera muchísimo empleo. Tampoco hay que olvidar que en los EE.UU. vive una importantísima colonia filipina y que las remesas de emigrantes son en estos momentos la primera fuente de divisas convertibles del país, por delante de las exportaciones de mercancías o del turismo. Por último, aunque el presidente sea anti-estadounidense, la mayor parte de los ciudadanos del archipiélago se fían mucho más de los EE.UU. que de China, según revela una reciente encuesta. Los mercados, evidentemente, se han hecho también eco de la inquietud que la nueva política exterior de Duterte suscita. Desde el pasado uno de agosto, casi 670 mill.\$ han salido de la renta fija y de la Bolsa filipina y la cotización del peso respecto del dólar (48,635 p/\$) se encuentra en el nivel más bajo desde la crisis de



Lehman Brothers, habiendo sido en los últimos meses la moneda asiática de peor comportamiento tras el yuan chino. Quizá por ello, los altos funcionarios filipinos se esfuerzan por “quitar hierro” a cada nuevo exabrupto de su jefe, tratando de convencer a los empresarios e inversores estadounidenses y europeos de que Filipinas velará por sus intereses a pesar del cambio de alianzas globales.

El presidente Duterte tiene aparentemente más puntos en común y mayor potencial para la sintonía con Donald Trump, sorprendente vencedor de las elecciones presidenciales en su país, del que tenía con Barak Obama, el presidente demócrata saliente. Ambos mandatarios son partidarios de un estilo directo de gobernar, los dos poseen una acusada vena populista que les permite conectar con el ciudadano medio y los dos creen ser capaces de resolver problemas complejos con soluciones “de rompe y rasga”. Días antes de los comicios y en previsión de una posible victoria electoral de Trump, Duterte había nombrado a José E.B. Antonio “enviado especial a los EE.UU.”. Dicho nombramiento tiene su lógica, puesto que se trata del consejero y jefe ejecutivo de Century Properties Group, la empresa que construyó bajo licencia la Trump Tower en Manila y, de hecho, las acciones de la citada empresa subieron como la espuma tras conocerse la victoria electoral de Trump.

Sin embargo, el temor de los empresarios estadounidenses ante las invectivas del presidente filipino no se ha desvanecido con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Por otro lado, algunas de las propuestas electorales de aquél, de ser puestas en práctica, perjudicarían mucho al archipiélago. Sería este el caso de la promesa de deportar a inmigrantes ilegales o con antecedentes penales; pero, sobre todo, la de traer a los EE.UU. las empresas y los puestos de trabajo previamente deslocalizados a países con mano de obra muy barata, lo que podría significar la repatriación desde “call-centers” a compañías fabricantes de semiconductores, otro de los sectores importantes de la economía filipina. Una y otra medida harían mucho daño a la economía del país



asiático: la primera por la pérdida de remesas y por la necesidad de acoger a los retornados y, la segunda, por su negativo impacto en el empleo. En definitiva, con Trump en el poder se abre indudablemente una nueva era en las relaciones entre los dos países. Lo que ya es menos indudable es que esa nueva era vaya necesariamente a ser mejor para Filipinas.

